

FRANCIA

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN MAYO

Un mes más, el proyecto de ley de reforma laboral ha acaparado la actualidad social de este país. Este proyecto llegó a la Asamblea Nacional francesa el día 3 de mayo, iniciándose así la batalla decisiva en relación con esta reforma. Después de tres meses de polémica, falsos debates, movilizaciones y tensión en todo el país, y un compromiso arrancado a los sindicatos reformistas –pero que no ha impedido que el texto sea rechazado tanto por la izquierda como por la derecha, con 5.000 enmiendas presentadas- la ministra de Trabajo tuvo, por fin, la oportunidad de defender su proyecto de ley ante los diputados. Y así lo hizo durante 15 días, hasta el 17 de mayo, cuando los diputados se pronunciaron sobre el mismo.

Tan pronto se abrieron los debates, los diputados comunistas obtuvieron una suspensión de la sesión para, según su líder, André Chassaigne, “marcar la diferencia entre política y patetismo” tras haber escuchado el discurso de la ministra. Y el ala izquierda de los ecologistas denunció, ni más ni menos, que “la monstruosidad” del proyecto de ley.

El fantasma del recurso al artículo 49-3 de la Constitución francesa se cernía más que nunca sobre los diputados. Según el ponente del texto, Christophe Sirugue, faltaban 40 diputados de la mayoría para que el texto fuese votado, y el Gobierno no excluía poder convencer a algunos de ellos. La oposición advirtió de que no iba a hacer el más mínimo regalo al Ejecutivo (campana para las elecciones presidenciales de 2017 obliga).

Al principio, el texto fue bien acogido pero, tanto Los Republicanos como la UDI (centro derecha) insistieron en los “innumerables retrocesos del Ejecutivo frente a la CGT, la Unef (estudiantes) y “Nuit Debout” (los Indignados franceses)”. Jean-François Copé (de Los Republicanos) atacó diciendo que “[hemos] pasado de un texto que debía flexibilizar el mercado laboral a un texto que lo vuelve rígido” y la UDI pidió su retirada. Ataques que sólo tenían por objeto correr un púdico velo sobre las reformas que ella misma no realizó cuando estaba en el poder, y así pudo justificar su voto en contra, a pesar de que reconoció -a regañadientes- los “avances” obtenidos con los acuerdos de preservación y desarrollo del empleo, y la clarificación del despido por causas económicas. Todo esto para, a continuación, fustigar un proyecto que es “todo lo contrario de lo prometido por François Hollande en su campaña electoral”. Una manera de hacerle subir la presión al Ejecutivo antes de amenazarle con una moción de censura si recurre al artículo 49-3.

El texto fue rechazado por todas las partes. Entre sus más fervientes adversarios figuraban los diputados del Frente de Izquierdas (coalición de partidos políticos creada por el Partido Comunista francés (PCF), el Partido de Izquierdas (PG) y la Izquierda Unitaria (GU) para las elecciones de 2009) y los ecologistas. Denunciando un texto que estiman favorable al empresariado, todos ellos reclamaron su retirada. E igual crispación tuvo lugar por parte de los diputados socialistas “rebeldes”, que fueron unos 20 en no votar la ley tal y como estaba, además de una decena de diputados del grupo, que denunciaron el mantenimiento de la ley El Khomri, pues

según ellos, facilita el despido por causas económicas, principalmente en las pequeñas empresas, en caso de descenso puntual de actividad.

Y al ser rebatido el texto por toda la izquierda, el Gobierno no pudo contar con los votos de la derecha ni del centro, pues, al igual que el empresariado, la oposición estaba muy exasperada por estimar el texto “no votable” sin la vuelta a las disposiciones que fueron suprimidas en 24 de marzo pasado, y que se referían al establecimiento de un tope legal a las indemnizaciones por despido improcedente.

Por todo ello, **el Gobierno utilizó el artículo 49-3 de la Constitución para aprobar el proyecto de ley de reforma laboral**. Tras la reunión del primer ministro y varios miembros del Gobierno con los diputados socialistas, en la mañana del 10 de mayo, y constatar el desacuerdo sobre algunos artículos del proyecto de ley, en particular el artículo 2 que establece la prioridad de aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales, el presidente de la República convocó un Consejo de ministros a las 14h30 para debatir sobre la utilización del artículo 49-3 de la Constitución. Al término de dicho Consejo de ministros, Manuel Valls se personó en la Asamblea Nacional para anunciar la decisión del Ejecutivo de utilizar este artículo que, en principio, supone la supresión del debate parlamentario.

El artículo 49-3 de la Constitución es un arma potente del Gobierno contra el Parlamento porque permite al Ejecutivo, tras deliberación en consejo de ministros, plantear una cuestión de confianza y no tener necesidad del voto del Parlamento para aprobar una ley. En efecto, el proyecto de ley se considera aprobado si tras la demanda de confianza, no se presenta o, en caso de presentarse, no se aprueba una moción de censura contra el Gobierno.

En reacción al anuncio del primer ministro, la oposición parlamentaria (partido Los Republicanos y el partido centrista UDI) anunció que iba a depositar una moción de censura contra el Gobierno de Manuel Valls y así lo hicieron. Ante la evidente imposibilidad de votar la moción de la oposición, los opositores al proyecto de la mayoría, que proyectaban presentar su propia moción de censura, no pudieron hacerlo por no haber sumado los 58 diputados necesarios para ello. Se adhirieron a esta propuesta 30 diputados socialistas que, unidos a otros opositores de izquierdas (comunistas, ecologistas, etc.) sumaron 56, sólo dos menos de los requeridos.

En este contexto, la tramitación parlamentaria del proyecto prosiguió con el debate y posterior voto de la moción de censura, presentada por 190 diputados en la Asamblea Nacional, el día 12 de mayo.

El procedimiento del artículo 49-3 permite la aprobación del proyecto en la Asamblea Nacional pero solo en este plenario. Posteriormente debe ser remitido al Senado que puede proceder a modificarlo. Una vez examinado en el Senado el texto con sus posibles modificaciones debe ser remitido de nuevo a la Asamblea Nacional, que podrá recurrir nuevamente al artículo 49-3.

Pero **la moción de censura contra la ley “El Khomri” no prosperó**. El Gobierno de Manuel Valls continúa gobernando y el proyecto de ley de reforma laboral se considera aprobado por la Asamblea Nacional en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49-3 de la Constitución. En efecto, la moción presentada por el partido de la

derecha Los Republicanos y el centrista UDI, fue votada por 246 diputados, mientras que la mayoría requerida para su aprobación es de 288. No obstante, conviene señalar que esta moción de censura fue votada por un mayor número de diputados que la ley Macron el pasado año.

El proyecto será remitido al Senado que, sin lugar a dudas lo modificará. Posteriormente será remitido a la Asamblea Nacional para su debate y voto en una nueva sesión plenaria, donde, si como es previsible el riesgo persiste, el Gobierno podrá aplicar otra vez el 49-3 de la Constitución.

La tensión ha aumentado sobremanera entre los diputados favorables y los contrarios al texto. A éstos últimos, Manuel Valls les acusó de destruir la izquierda.

La tensión también fue importante en la calle, donde hubo movilizaciones de protesta por la utilización del artículo 49-3, que no fueron seguidas masivamente pero sí tuvieron importantes episodios de violencia.

Tras la adopción -gracias al « arma constitucional » del artículo 49-3- del proyecto de ley por la Asamblea Nacional en primera lectura, el presidente de la República, fue entrevistado por la emisora de radio Europe 1. **François Hollande repitió en numerosas ocasiones que no cedería ante las presiones.** Mientras la movilización en contra de este texto proseguía, con nuevas jornadas de huelgas y manifestaciones convocadas por las centrales sindicales CGT, FO, FSU, Solidarios, Unef, UNL y Fidj, el presidente aseguró que la ley será aprobada. «No cederé », aseveró.

Entre tanto, las **movilizaciones en contra de la reforma laboral continuaban en todo el país.** La retirada del texto, por el que los sindicatos contestatarios están movilizados desde hace tres meses es improbable, pero éstos no retroceden. Y, sin embargo, marcada por incidentes violentos, dicha movilización ha empezado a perder impulso.

El 12 de mayo, la quinta jornada de acción sólo reunió a 55.000 manifestantes en toda Francia, según el ministerio del Interior (la CGT no comunicó una cifra global), frente a 390.000 el 31 de marzo. A pesar de ello, siete organizaciones sindicales convocaron dos nuevas jornadas de huelgas y manifestaciones, los días 17 y 19.

La intersindical anunció una lluvia de huelgas en la semana del 16 al 22 de mayo, en algunos casos reconducibles, como en el transporte aéreo, por carretera, mar, ferrocarril, en los puertos, etc. Y otros sectores han estado trabajando en la organización de fuertes manifestaciones, incluso con huelgas: el comercio, la energía, los servicios públicos, la química.

Con esta tentativa de lanzar huelgas reconducibles, la CGT se juega el todo por el todo y ha utilizado sus últimos cartuchos; pero para que éstos sean eficaces, se requieren dos condiciones: la primera, que se bloquee la actividad y, la segunda, que dure. Y ello supone llegar hasta el 13 de junio, fecha en la que el proyecto de ley El Khomri será debatido en el Senado.

Philippe Martínez, que siempre ha apartado la idea de una huelga general, es consciente de las dificultades para movilizar. « Estamos preparando el proceso de fortalecimiento de la movilización. Son decisiones difíciles de tomar; pulsar un botón

no es suficiente ». Pero el secretario general de la CGT piensa que « los trabajadores están dispuestos a comprometerse con un endurecimiento de la movilización ». Aunque el reto es temible. En una central sindical que sólo sindicaliza -según ella misma- al 2,62% de los trabajadores, ¿qué proporción estará dispuesta a sufrir bajas salariales por una causa que ya está perdida (como en 2010 por la reforma de las pensiones)?.

Debilitación de la movilización del martes, 17 de mayo

La sexta jornada de movilización en contra del proyecto de ley de reforma laboral fue un poco mayor que la del día 12 de mayo (unos 55.000 manifestantes), pero continúa siendo muy limitada. Unas 68.000 personas manifestaron en toda Francia, de las cuales entre 11.000 y 12.000 en París según la policía. Al igual que en otras ciudades, también hubieron nuevos enfrentamientos entre fuerzas del orden y vándalos, a los que se sumaron operaciones “caracol” y cortes en las carreteras, así como acciones que paralizaron la zona portuaria e industrial de Le Havre y Saint-Nazaire, y la refinería de Donges. Pero ninguna de estas acciones ha tenido envergadura suficiente para paralizar al país.

Ello no escapó al Jefe del Estado quien, en una entrevista concedida a la emisora de radio Europe 1, declaró: “No me parece que las movilizaciones estén poniendo en peligro los medios para circular”.

La nueva jornada de acción a la que han llamado los sindicatos CGT, FO, FSU y las organizaciones de jóvenes anti-ley El Khomri el jueves, día 19 de mayo, que afectará igualmente a los ferrocarriles franceses (SNCF), servirá de prueba.

Pero el presidente de la República lo tiene muy claro: “Esta ley va a ser aprobada”. Y explica que su reforma “ha sido debatida y concertada, corregida y enmendada”, declarando: “No cederé”.

Esta firmeza ha suscitado inmediatamente la reacción del líder de la CGT: “Hoy asistimos a la generalización de la huelga”, aseguró Philippe Martínez en la manifestación parisina; aunque no se percibió en la manifestación de París, en la que pocas delegaciones sindicales de empresa estuvieron presentes. Por su parte, la secretaria general de FSU, Bernadette Groison, dijo que “apostar por el deterioro de la situación o utilizar el artículo 49-3 es aplazar el problema”. En cuanto a Laurent Bergé (CFDT), interrogado por el canal de televisión BFMTV sobre el debilitamiento de la movilización, respondió, lacónico, que “las cifras hablan por sí mismas”.

El Gobierno y la CGT enfrentados en una lucha sin cuartel.

El bloqueo de las refinerías y los depósitos de petróleo por la CGT no parece apaciguarse. El martes día 24 de mayo, desde muy temprano, los accesos a la refinería de Fos-sur-Mer, en el departamento de Bouches-du-Rhône (Sur de Francia), fueron desbloqueados por las fuerzas de seguridad y la CGT ha denunciado una operación “inaceptable”, hablando de “escenas de guerra”, mientras que Manuel Valls, en viaje a Jerusalén, prometió que habría nuevos desbloques, previniendo que “la CGT va a encontrarse con una respuesta del Gobierno extremadamente firme. “Vamos a continuar evacuando las plantas y los depósitos

que están bloqueados por esa organización”. Palabras que han suscitado una respuesta inmediata de Philippe Martínez (“el primer ministro juega a un juego peligroso”), quien se dice dispuesto a “ir hasta el final” para obtener la retirada del proyecto de ley.

Para el Gobierno no es cuestión de dejar que se instale el caos a pocas semanas de la celebración del Euro 2016 de fútbol, cuando el estado de urgencia todavía está en vigor y la amenaza terrorista continúa siendo alta.

“El derecho de huelga sí, bloquear las refinerías no”, resumía un ministro. Tampoco es cuestión de retirar el proyecto de ley, a pesar de que esa retirada es la única reivindicación de la CGT. “No se va a retirar el texto, si no, en este país no se van a poder hacer reformas”, ha repetido el primer ministro para quien la “radicalización de la CGT plantea incontestablemente un problema”. Mensaje repetido una y otra vez por los barones de la mayoría, quienes, al igual que Jean-Christophe Cambadélis, primer secretario del Partido Socialista, estiman que “una central sindical no es quien debe legislar”. François Hollande también deplora “un bloqueo basado únicamente en una estrategia defendida por una minoría”.

El precio político de la retirada de la ley sería demasiado caro: el compromiso difícilmente obtenido con la CFDT y los sindicatos reformadores volaría por los aires y los últimos meses del quinquenio, ya de por sí complicados, serían un largo calvario. Incluso el diputado Philippe Doucet, miembro reformador del PS, estima que “Hollande y Valls deben resistir pues lo que está en juego es la autoridad del Estado”.

En unos días, la crisis social provocada por el proyecto de reforma laboral se ha transformado en una lucha a muerte entre el Gobierno y la CGT.

Y a este movimiento, que ya dura dos meses, vienen a sumarse las convocatorias de huelga para reivindicaciones más específicas, llevadas a cabo por la CGT (y otros sindicatos): a partir del 31 de mayo en los Ferrocarriles franceses, el 2 de junio en la Red de transportes parisinos). También han llamado a la huelga todos los sindicatos de la aviación civil –aunque por otros motivos- los días 3 a 5 de junio.

La llegada del proyecto de ley al Senado el 13 de junio se anuncia bajo alta tensión. Y su retorno a la Asamblea Nacional en julio será todavía más eléctrica. En caso de recurrir de nuevo al artículo 49-3, que parece muy probable vista la situación actual, la izquierda de la izquierda espera poder reunir las 58 firmas de diputados necesarias para presentar una moción de censura “de izquierdas”. La primera vez le faltaron dos firmas.

Durante este tiempo, las permanencias del Partido Socialista están siendo vandalizadas y la derecha, que desea deshacer el texto en el Senado, ataca al Gobierno con la situación de los desórdenes en el país. La oposición apuesta por la retirada del texto debido a la falta de autoridad del Gobierno. Por su parte, François Hollande, dice ver en la crisis actual más “un conflicto tradicional” que una réplica de mayo del 68.

Un volumen de 50 páginas dedicado sólo y exclusivamente al artículo 2 del proyecto de ley de reforma laboral.

El artículo 2 de proyecto de ley El Khomri, que constituye el centro de dicho proyecto y fue adoptado en primera lectura el 11 de mayo, fue objeto, el miércoles día 25 de mayo, de numerosas declaraciones por parte de algunos diputados de la mayoría y de miembros del Gobierno.

A lo largo de 50 páginas este artículo declina, en el ámbito de la jornada laboral y de los permisos, el famoso principio de la reversión de la jerarquía de las normas (es decir que, un texto de nivel superior -por ejemplo, un acuerdo sectorial- se impone a un acuerdo de empresa, que es de nivel inferior).

Este artículo plantea pues un nuevo sistema puesto que cada tema se declina, cada vez, en tres partes:

- Primero: las medidas de “orden público” que no pueden ser derogadas;
- Después, el “ámbito de la negociación colectiva”, que especifica lo que puede ser negociado en un acuerdo de empresa (o en su defecto, a nivel sectorial), y
- Finalmente, las “medidas supletorias”, suerte de coche-escoba que se impone en caso de que las negociaciones fracasen.

Terminada pues la primacía del acuerdo sectorial sobre el acuerdo de empresa. Este último podrá prevalecer sobre un convenio sectorial aunque sea menos favorable.

Y lo que también plantea mucha polémica es el porcentaje de aumento de las horas extraordinarias. En la actualidad las primeras ocho horas son remuneradas un 25% más; según este artículo, en el futuro podrán ser aumentadas sólo un 10%, en el caso de que la empresa y la mayoría sindical representativa firman un acuerdo. O incluso por referéndum de los trabajadores cuando los sindicatos favorables a esta medida sólo hayan obtenido el 30% de los votos en las últimas elecciones sindicales. Esta derogación sobre el pago de las horas extras ya es posible, pero puede ser prohibido por un acuerdo sectorial, como ocurre en la metalurgia.

La movilización contra la reforma laboral no acaba de despegar.

La octava jornada de acción en contra del proyecto de ley El Khomri movilizó el jueves, día 26 de mayo, a poca más gente que la anterior. Según la policía 153.000 manifestantes en toda Francia, frente a 128.000 la semana pasada. Por el contrario, según la CGT, la movilización habría pasado de 400.000 personas a cerca de 300.000 ayer, con lo que estas cifras están todavía muy alejadas del pico del 31 de marzo. Hace cerca de dos meses, salieron a la calle 390.000 personas según la policía y 1.200.000 según la CGT. Estas jornadas continúan estando muy por debajo de las movilizaciones de 2010 sobre la reforma de las pensiones: entre 1.000.000 de personas según la policía y 3.000.000 según los sindicatos.

La jornada fue marcada sobre todo por la guerrilla declarada por la CGT a golpe de bloqueos y de cortes de carreteras, y de huelgas en las refinerías de petróleo. Seis de cada ocho refinerías estuvieron cerradas o funcionaron al ralentí, y más de 2.000 gasolineras estuvieron en ruptura total o parcial.

En lo que a los transportes se refiere, ha habido algunos movimientos muy localizados, pero en los ferrocarriles franceses (SNCF) están habiendo muy pocas perturbaciones. La principal novedad fue la huelga en las centrales nucleares, aunque sin interrupción de la producción eléctrica.

El número uno de la CGT, Philippe Martinez no ha aflojado la presión y estima que François Hollande “ya no tiene mayoría”; pero también ha declarado que ha pedido que le reciba el jefe del Estado. Por el momento no ha recibido respuesta. El Sr. Martinez acusa al Gobierno de “carecer de voluntad de diálogo con el primer sindicato de Francia”; una respuesta a Manuel Valls que calificó a la CGT de “sindicato minoritario”.

En el Elíseo, el entorno del jefe del Estado afirma que por ahora “no está prevista ninguna entrevista”, dirigiéndolo así a “su interlocutor”: el Gobierno.

Antes de que los oponentes al texto bajasen a la calle ayer jueves, el Ejecutivo hizo un gesto de apertura. Más con la esperanza de atraer a Fuerza Obrera y a una parte de los rebeldes del Partido Socialista, que para calmar a la CGT. Manuel Valls, que el día anterior explicó que no habría “ni retirada ni modificación del artículo 2 del proyecto de ley, pues es el centro de la filosofía de la ley de reforma laboral”, ha vuelto a excluir “un cambio de marco”. Pero, en Radio Montecarlo (RMC) el primer ministro reconoció que “siempre pueden realizarse modificaciones, mejoras”, aunque también dice “que no sabe cuáles”.

Tanto en el Elíseo como en Matignon explican que “la filosofía” y “el equilibrio” del texto en general, y del artículo 2 en particular, “no deben tocarse”. El acuerdo de empresa “prevalecerá” sobre el sectorial, subraya el ministro de Finanzas, Michel Sapin.

La próxima cita de la calle está programada para el 14 de junio, cuatro días después del inicio del Euro de fútbol. Pero según Jean-Claude Mailly, secretario general de Fuerza Obrera, el pulso continúa...

Y por lo que a la reforma laboral se refiere, el mes de mayo finaliza con la noticia de que **el líder de la CGT ya no exige la retirada de la ley de reforma laboral**. Philippe Martínez, que el domingo 29 de mayo empezó a bajar de tono felicitándose de que el primer ministro le hubiese telefoneado la víspera, ha dado un paso atrás afirmando que “está dispuesto” a “volver a debatir” con el Gobierno del proyecto de ley de reforma laboral, y ello sin ninguna exigencia previa. Ya no reivindica, como lo hacía semanas y días pasados, la retirada del texto, y se dice abierto a la discusión aunque enumera cuatro puntos importantes de desacuerdo:

- La reversión de la jerarquía de las normas, con la preeminencia del acuerdo de empresa sobre el acuerdo sectorial en la organización de la jornada laboral (artículo 2 del proyecto de ley),
- El perímetro del despido por causas económicas,
- La instauración de un referéndum en caso de acuerdo minoritario, y
- La reforma de la medicina del trabajo.

El sindicalista ha realizado estas declaraciones en el transcurso de un debate inédito: respondiendo a una invitación de la emisora Radio Tele Luxemburgo (RTL), con su homólogo de la CFDT, para hablar del proyecto de ley El Khomri.

Se esperaba un ambiente eléctrico entre Philippe Martínez y Laurent Berger, ya que el primer día del congreso de la CGT, a mediados de abril, el cegetista volvió la espalda, ostensiblemente, a la CFDT evocando “el error que [la CGT] había cometido estos últimos años favoreciendo sus relaciones con la CFDT”. Error que “hemos corregido en el conflicto [actual]”, agregó el Sr. Martínez ante sus predecesores Louis Viannet y Bernard Thibault, promotores del “sindicalismo unido”. Por lo que respecta a Laurent Berger, el domingo condenó el “extremismo mortífero” a propósito del conflicto sobre la reforma laboral.

En RTL tanto el uno como el otro se ciñeron a los temas de fondo y ello proporcionó la ocasión al líder de la CGT de revisar su lectura del proyecto de ley El Khomri. “¿Es necesario retirar este texto que comporta cierto número de adelantos?, le preguntó Laurent Berger evocando la Cuenta Personal de Actividad (CPA) y, principalmente, la Cuenta Trabajo difícil (en francés “Compte pénibilité”). A lo que Philippe Martínez contestó: “estamos de acuerdo en esto”, aunque los derechos creados sean “embrionarios”, recordando la reivindicación de la CGT de “una Seguridad Social profesional”.

También se esperaba que los dos sindicalistas confirmaran sus divergencias sobre el modo de acción sindical que se debe privilegiar: la “negociación” para la CFDT y la “lucha” para la CGT, que hizo de la misma uno de los ejes clave de su congreso. Pero Philippe Martínez insistió en la participación de su organización en las negociaciones, recordando que ésta firma el 85% de los acuerdos de empresa.

Finalmente, se pensaba igualmente que el debate iba a transformarse en un enfrentamiento violento entre los líderes de los dos primeros sindicatos franceses. En cierto modo, el calco en el campo sindical de las famosas “dos izquierdas irreconciliables” evocadas por Manuel Valls. De hecho, el primer ministro no deja pasar ninguna ocasión de oponerlas, poniendo por las nubes a la CFDT e incendiando a la CGT. Pero esto no ha ocurrido. Por lo demás, a la vista de los programas que presentan los diversos candidatos a las primarias de la derecha, la unidad podría rápidamente convertirse en actualidad en caso de alternancia.

En este mes de mayo, aunque la actualidad ha sido centralizada por el proyecto de ley El Khomri, también se ha hablado de otros temas relevantes como, por ejemplo, el de la **evacuación por la policía del campamento de migrantes instalado bajo la estación de metro aéreo Estalingrado**, en el distrito 19 de París, el lunes 2 de mayo. Según la prefectura, “1.619 personas han sido “protegidas” y trasladadas “a centros de acogida, principalmente en la región parisina”. Las autoridades han especificado que se trata de la operación más importante de la veintena que se han venido llevando a cabo en el último año, de campamentos de migrantes en la capital francesa.

Poco después de las 6 de la mañana, los primeros migrantes, especialmente sudaneses y afganos, empezaron a subir a los autobuses que los iban a trasladar a centros de acogida, en la región parisina y provincias. La víspera se contaron entre

400 y 500 personas pero ayer lunes eran mucho más numerosos. La operación, llevada a cabo por la Ciudad de París, la prefectura de la Región Parisina y la prefectura de policía, fue efectuada bajo la vigilancia de un importante dispositivo de policía entorno al campamento, habiendo sido cortada la circulación en el boulevard Voltaire, donde éste estaba ubicado.

Los migrantes “van a solicitar asilo” en los centros de acogida, y los que no lo hagan o se conduzcan mal serán expulsados. Francia no es tierra de desorden ni confusión”, declaró Jean-François Carenco, prefecto de la Región Parisina, allí presente.

Una veintena de operaciones de “protección” de esta clase ya se han llevado a cabo en París desde el 2 de junio de 2015, fecha de evacuación del campamento instalado en la zona de La Chapelle, también en el norte de París. El de Estalingrado, que ya fue evacuado una primera vez el 7 de marzo, y luego el 30 de marzo, habiéndose vuelto a formar poco después.

Sin embargo, algunos de sus ocupantes ya habían marchado unos 10 días antes y se habían instalado en un instituto de enseñanza secundaria desafectado del distrito 19, cuya “rápida” evacuación fue ordenada el viernes pasado por el tribunal administrativo de París.

La prima de actividad, creada en enero para ayudar a los trabajadores pobres o humildes, va a costar más de los 4.000 millones de euros previstos en los presupuestos generales del Estado francés para 2016.

La tendencia parece rondar los 500 millones suplementarios al año, si se multiplica el número de familias beneficiarias, que es más alto de lo previsto (2,3 millones en lugar de 2 millones), por la cuantía media mensual, igualmente superior a las previsiones de 164 euros en lugar de 160.

Sin embargo, en el seno del Gobierno se estima que el sobre coste debería ser más bajo pues, aunque 2,3 millones de familias hayan cobrado la prima al menos una vez desde el mes de enero, éstas no han hecho más que entrar y salir del dispositivo. Al final, en marzo “sólo” se han beneficiado 2,1 millones de familias.

De la misma manera, también es de esperar que algunos beneficiarios ya no tengan derecho a la prima de actividad en el transcurso del año porque sus ingresos mensuales superarán 1,3 vez el SMI o bien porque habrán perdido su trabajo. Esto hará que la factura sea menos cara en diciembre.

Pero por el momento se observa la tendencia contraria, es decir, que los candidatos empiezan a afluir a las Cajas de Prestaciones Familiares. En el ministerio de Asuntos Sociales se felicitan por ello pues hace años que se venía deplorando la tasa tan baja de personas que solicitaban la Renta de Solidaridad Activa - “actividad”, antecesora de la prima de actividad. Sólo el 32% de las familias que hubiesen podido beneficiarse de la RSA-actividad la solicitaron; el resto, o bien no entendieron que tenían derecho a ella o estaban desalentadas.

La prima de actividad beneficia ya a 2,3 millones de familias (3,8 millones de personas) y se ha superado el objetivo recogido en la ley, es decir alcanzar el 50% de la tasa de peticiones. Si todas las personas que tienen derecho a ella la cobrasen serían 4 millones de familias, incluidos 5,6 millones de activos. Y si se agregan los hijos, serían 11 millones.

Por el contrario, la factura no se duplicaría porque una tasa de peticiones del 50% corresponde al 66% de la masa financiera potencial –las familias susceptibles de recibir ayuda son, *a priori*, las primeras en solicitarla.

Una de las razones de este éxito es la desmaterialización total del procedimiento: es inútil desplazarse para presentar los justificantes. De hecho, el 95% de las gestiones para obtener la prima se realizan en línea. Y son muy numerosas las personas que se conectan para ver si pueden ganar algo más: se han realizado 12,5 millones de simulaciones de derechos en línea.

Pero este éxito tiene un coste y, este coste, todavía desconocido, viene a sumarse a los 4.300 millones de euros prometidos por el Gobierno desde principios de año para luchar contra el paro y calmar el descontento de ciertas categorías profesionales: 1.000 millones de euros para la prima destinada a la contratación en las pequeñas y medianas empresas, 900 millones para el plan de apoyo a los agricultores, 600 millones más para el aumento del salario de los funcionarios (contando sólo este año, 2016), 300 millones para el de los maestros y 600 millones destinados a la formación de los parados.

Otro tema importante son las **negociaciones sobre el seguro de desempleo** que han sido reanudadas el jueves 12 de mayo y contaron con la presencia de la organización patronal Medef, que no ha cumplido su amenaza de abandonar la negociación si el Gobierno no atendía sus reivindicaciones sobre el proyecto de ley de reforma laboral. Los interlocutores sociales se han puesto de acuerdo en las fechas para las próximas reuniones de negociación, que tendrán lugar el 30 de mayo y el 14 de junio. En cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo en el plazo impartido (antes del 30 de junio, fecha en que expira el actual convenio) organizaciones patronales y sindicatos difieren. Las primeras creen que es posible terminar el convenio en el plazo, mientras que los sindicatos creen que la complejidad y la tecnicidad de algunos aspectos hacen imposible finalizar antes del 30 de junio.

Si no se cumplieran los plazos, tanto los sindicatos como las patronales prevén que se prologue la vigencia del actual convenio.

Comunicado de la Ministra de Trabajo sobre la creación de empleo en Francia.

En un comunicado difundido el 13 de mayo, la ministra de Trabajo, Empleo, Formación profesional y Diálogo social, Myriam el Khomri, indicaba que en el primer trimestre de 2016 se ha confirmado la creación de empleo por cuenta ajena observada desde finales de 2014: en el primer trimestre se crearon 24.400 empleos netos en el sector privado, lo que representa un incremento del 0,2%.

El aumento ha sido importante y acelerado en el sector terciario, donde se han creado 38.800 empleos, la progresión más importante desde mediados de 2011. En un año se han creado 176.000 empleos en este sector, incluyendo el trabajo temporal.

Sin embargo, el empleo retrocede en el sector industrial y en la construcción. Aunque, en este último, la reactivación del sector (incremento de las obras de construcción de nuevas viviendas de un 3% en un año) empieza a tener influencias positivas sobre el empleo.

Los empleos creados son más estables: las contrataciones con CDI han aumentado de manera significativa en el primer trimestre de 2016 (+3,8%)

La ministra explica que el desarrollo positivo del empleo es debido a la reactivación de la actividad económica constatada en el primer trimestre como consecuencia de la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno (principalmente, el Pacto de responsabilidad y solidaridad, el Crédito de impuesto para la competitividad y el empleo, y la ayuda a la contratación en las PME).

Francia-OCDE: un quinquenio que “va mal”

En este principio de año, los indicadores macroeconómicos -crecimiento, empleo, inversión- se han puesto en verde (pálido). Pero aunque Francia parece haber tocado fondo, el retraso acumulado frente a los otros países ricos de la OCDE desde hace cinco años es importante.

Los cuatro primeros años del quinquenio de François Hollande no han permitido enderezar el timón y, a pesar de que el presidente trata de convencer a los franceses de que el país “va mejor”, la prensa demuestra que el país “va sólo un poco mejor”. El diario *L'Opinion* del martes, 17 de mayo, publicó un artículo en el que subrayaba las diferencias de crecimiento, inversión, consumo de las familias, de las administraciones públicas y paro, entre Francia y los restantes países de la OCDE.

Es el paro, además de la falta de crecimiento (Francia un 2,5% frente al resto de los países de la OCDE un 5,4%), el indicador que hace decir a los franceses, a pesar de que muestra señales de mejora, que “Francia va mal”. A finales de 2015, la tasa de paro en Francia era de un 10,4% cuando en los otros países de la OCDE no superaba un 6,8%.

Contando sólo a los siete grandes países de la OCDE, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, la media nacional de la tasa de paro era de un 5,8% a final de 2015. A final de marzo de 2016, el paro ha retrocedido en un 10% en Francia. En la OCDE era de un 6,4%, y de un 5,5% en “los siete grandes”.

Trabajadores desplazados: la reforma que divide a la Unión Europea.

Once Estados miembros (de los cuales 10 situados al Este, a los que se une Dinamarca) han protestado oficialmente contra un proyecto de directiva de la Comisión de Bruselas sobre los trabajadores desplazados.

En el mes de marzo pasado, la comisaria belga de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, presentó un texto que se suponía revisaba el sistema de 1996, defendido por los antiguos países comunistas, pero fuertemente atacado por otros (Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, etc.). Éstos deploran la competencia desleal que ha originado en diversos sectores de actividad –construcción, transporte, sanidad, agricultura, etc.- En 2014 se llevó a cabo una primera revisión destinada a luchar contra los abusos.

La Unión Europea cuenta con 2.000.000 de trabajadores desplazados, de los que casi la mitad se agrupa en tres países: Francia (400.000 censados en 2014), Alemania y Bélgica.

La Sra. Thyssen desea mantener el principio del trabajo desplazado, que es una de las bases del mercado interior, pero reducir las diferencias de coste del trabajo entre los trabajadores que ejercen en un mismo país. Algunos trabajadores desplazados cobran dos veces menos que los nacionales.

En la semana del 9 de mayo, los países favorables al statu quo, encabezados por Polonia, han sacado el “cartón amarillo”, procedimiento instituido en 2009, que permite impugnar una directiva a título del necesario respeto de la subsidiaridad. Este procedimiento autoriza a los Parlamentos nacionales a emitir un “dictamen motivado” en relación con un texto que afecta al ámbito de competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados.

La Comisión está obligada a reconsiderar su iniciativa si los protestatarios estiman que ésta interfiere demasiado en sus prerrogativas. El umbral para que se tenga en consideración el “cartón amarillo” es de 19 votos de 56 (dos veces el número de Estados miembros). Los 11 Parlamentos que han declarado la guerra a la Sra. Thyssen totalizan 22 votos. La Comisión deberá pues revisar su texto.

En principio, las disposiciones del tratado europeo sobre el “cartón amarillo” permiten que Bruselas mantenga su texto, pero es poco probable que sobre una cuestión tan sensible el colegio europeo opte por el enfrentamiento. “No es necesario agregar más divisiones a las ya existentes”, explica un alto funcionario haciendo una alusión a la crisis de los refugiados que ya ilustró el cisma entre países que aceptan el principio de acogida y los que se oponen a él -principalmente los del Este.

El entorno de Marianne Thyssen defiende su plan, descrito como “equilibrado”, pero evoca la necesidad de “evaluar la situación para determinar el camino a seguir”. La negociación con los países afectados debería iniciarse rápidamente.

La confusión de la Comisión es palpable tanto más cuanto que los partidarios de la reforma quieren influir en el debate.

En Francia, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, publicó el viernes 13 de mayo, un comunicado estimando que el fortalecimiento de las normas europeas es un “imperativo absoluto”. La inquietud de los Estados que protestan “debe, por supuesto, ser tenida en cuenta”, explican en París, pero “ningún país puede

satisfacerse con los abusos que se cometen actualmente en materia de desplazamiento de trabajadores, que ponen en peligro sus derechos elementarios, que falsean la competencia y socaban nuestra cohesión social e, in fine, el proyecto europeo”, indica la Sra. El Khomri.

La Sra. Thyssen, entre la espada y la pared, deberá responder igualmente a las críticas del patronato europeo, que apoya el procedimiento del “cartón amarillo”. Business-Europe no niega las dificultades encontradas en ciertos sectores, pero teme la aplicación del principio defendido por la Sra. Thyssen: mismas condiciones de remuneración para todos aquellos que trabajan en una misma empresa, cualquiera que sea el origen de su contrato. La comisaria entiende limitar el desplazamiento a dos años. El trabajador ya no se beneficiaría sólo del salario mínimo del país de acogida, sino también de todas las primas y ventajas de los nacionales.

La parte sindical no se conforma con promesas sobre una reforma que llevará retraso. Éstos denuncian el “tremendo dumping social”, que pone incómoda principalmente al sector de la construcción.

Se ha organizado una conferencia europea sobre este tema, que se está celebrando esta semana, los días 17 y 18 de mayo en Bruselas. En ella, 14 trabajadores rumanos empleados en Flandes deben testimoniar sobre sus condiciones de empleo. Y, en la ciudad de Charleroi, siete obreros egipcios empleados por un subcontratista italiano han denunciado la explotación de la que están siendo víctimas: trabajan 15 horas diarias y sólo se les pagan ocho, y, además hace cuatro meses que esperan su salario.

Economía colaborativa: lo que ya prevé el proyecto de ley de reforma laboral.

Según el diputado socialista Pascal Terrasse, autor de un informe sobre la economía colaborativa entregado al primer ministro en febrero pasado, el procedimiento lanzado por la Urssaf (organismo de recaudación de las cuotas de Seguridad Social y prestaciones familiares) en contra de la sociedad americana Uber, constituye un riesgo para todos los profesionales del sector. “Si la Urssaf recalifica a los conductores de Uber como trabajadores asalariados, otros se encontrarían en la misma situación y todos saldrían perdiendo”, previene el Sr. Terrasse. Con toda seguridad esto llevaría a numerosas plataformas digitales semejantes a Uber a abandonar su actividad.

Más que la generalización del asalariado, el diputado recomienda la “convergencia de los derechos sociales entre los trabajadores y los autónomos”, idea que explica en su informe y que, en parte, ha sido retomada en el proyecto de ley El Khomri sobre la reforma laboral.

Parte de este texto afecta a la responsabilidad social de las plataformas, cosa que no ha sido prácticamente subrayada debido a que el debate político, con el recurso al artículo 49-3, ha eclipsado los numerosos aspectos del texto.

Con el proyecto de ley El Khomri “concedemos nuevos derechos a estos trabajadores pero no les reconocemos la relación de asalariado, ya que no se presta

a estas plataformas”, resalta Christophe Sirugue, ponente del texto en la Asamblea Nacional. Gracias a dicha ley los trabajadores de las plataformas podrán constituir un sindicato y afiliarse a él, o beneficiarse del derecho de acceso a la formación profesional.

Otro cambio introducido en el texto es el hecho de que los jóvenes trabajadores del sector de la economía colaborativa puedan acceder a la VAE (valoración de los conocimientos adquiridos y de la experiencia profesional), dispositivo que no afecta sólo a los trabajadores del sector digital -según Christophe Sirugue-, sino también a la mayoría de los autónomos.

Pascal Terrasse estima pues que su informe no ha sido enterrado como algunos lo quieren hacer creer. El diputado socialista espera, incluso, que otra de sus recomendaciones será reconocida favorablemente por el Gobierno: la de “la creación de una suerte de fondo de garantía que permitiría a los prestatarios de servicios poder beneficiarse de préstamos o de fianzas para una vivienda”.

Otro dispositivo que defiende el Sr. Terrasse consiste en que, en la actualidad, “si usted es conductor en Uber, la plataforma puede retirarle de sus listas (en francés “déréférencer”). Esto no podrá realizarse ya de un día para otro”, explica Pascal Terrasse, llamando a “un procedimiento estándar, un poco a imagen del que existe para el despido pero sin llegar a la posibilidad de poder recurrir a los “prud’hommes” (tribunales de los social)”.

El Sr. Terrasse empuja también a la creación de “territorios colaborativos”. “Esta medida va a ser anunciada este viernes por el primer ministro, con un presupuesto de 35 millones de euros”. Se trata de hacer emerger territorios candidatos al desarrollo de un ecosistema digital, con ayudas destinadas a la creación de plataformas.

Y el mes de mayo finaliza con una noticia positiva: la tasa de desempleo baja por segundo mes consecutivo.

La ministra de Trabajo, Empleo, Formación profesional y Diálogo social, Myriam El Khomri, publicó el jueves día 26 de mayo un comunicado en el que informaba sobre las cifras del paro del mes de abril 2016.

Según la ministra, en el mes de abril, el número de demandantes de empleo inscritos en Pôle emploi en categoría A, es decir, sin ninguna actividad asalariada, ha disminuido en 19.900 con relación al mes de marzo, o sea un -0,6%. Se trata del segundo mes consecutivo de baja, situación que no se ha producido desde hace cinco años.

La baja constatada en abril afecta, una vez más, a todas las clases de edad. La situación de los jóvenes continúa mejorando; así, el número de demandantes de empleo menores de 25 años inscritos en la categoría A disminuye en 5.200 en marzo (o sea -1,0%), lo que hace que la baja desde hace un año ascienda a 40.000 personas.

El número de demandantes de empleo obligados a buscar empleo (inscritos en las categorías A, B y C) disminuye en 57.100 (-1,0%); se constata, sin embargo, un alza inhabitual del número de demandantes de empleo, principalmente en las categorías B y C, que no han actualizado su situación en Pôle emploi (+55,700 con relación al mes de marzo). Varios motivos podrían explicar tal evolución:

- Primero, un número de días festivos más reducido en el mes de mayo, y
- segundo, sin duda, un número significativo de personas que, habiendo encontrado una actividad, no han actualizado su situación en Pôle emploi.

Esta evolución no cuestiona la baja del número de inscritos desde principios de año que, en el caso de los demandantes de empleo sin actividad alguna, alcanza cerca de 70.000 (-1,9%).

Dicha baja puede explicarse por el dinamismo de las creaciones de empleo asalariado observadas en estos últimos meses, y debido a las medidas establecidas por el Gobierno (Pacto de responsabilidad, CICE, 330.000 ayudas para la contratación en las pequeñas y medianas empresas).

El Plan de 500.000 formaciones suplementarias para las personas que buscan empleo se ha llevado a cabo mediante la firma con las Regiones, de 14 convenios. Dicho Plan va a permitir que, en los próximos meses, los demandantes de empleo puedan beneficiarse de nuevas oportunidades profesionales.

Así pues, el Gobierno está determinado a consolidar esta recuperación y acelerar sus efectos sobre el empleo, con objeto de que la baja del paro se prosiga y se amplifique.